

Paraguay frente al avance del cultivo de soja transgénica, dos modelos societales en tensión. Las comunidades campesinas como resistencia al modelo agroindustrial.

Mariana C. Fassi.

Cita: Mariana C. Fassi (2007). Paraguay frente al avance del cultivo de soja transgénica, dos modelos societales en tensión. Las comunidades campesinas como resistencia al modelo agroindustrial. *VII Jornadas de Sociología*. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <http://www.aacademica.org/000-106/262>

Paraguay frente al avance del cultivo de soja transgénica, dos modelos societales en tensión. Las comunidades campesinas como resistencia al modelo agroindustrial.

Mariana C. Fassi

Lic. en Ciencia Política. Becaria CONICET/UBA. Integrante del Observatorio Social de América Latina (OSAL/CLACSO)

fassi.mariana@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Las sociedades modernas se levantan sobre la desorganización de las formas comunitarias -que son formas de totalización de la vida social- sin llegar a construir una nueva unidad de sentido que rearticule todo lo que ha perdido su horizonte. El proceso de modernización integra a determinados sectores de la sociedad al ámbito del reconocimiento político a través de los derechos, convirtiéndolos en ciudadanos, y deja un conjunto de prácticas en condiciones de marginación y desarticulación que acaban configurando el subsuelo político (Tapia, 2007a).

Hoy Paraguay es el cuarto país exportador y sexto productor mundial de soja transgénica. En el marco del proceso de globalización neoliberal, la agricultura se ha integrado internacionalmente a través de la implantación del modelo agroindustrial. Pero a este efecto, la organización del territorio nacional ha debido transformarse, pues la rentabilidad de la soja se basa en el desarrollo del cultivo a gran escala, con un nivel de tecnificación que implica la expulsión del campesinado de sus territorios. En consecuencia, en un país donde casi la mitad de los pobladores vive en áreas rurales y depende de la producción primaria, la soja es resistida por diversos movimientos campesinos, que ven cómo la expansión del modelo agroexportador empeora la concentración de la tierra y afecta a las poblaciones locales en múltiples sentidos.

El presente trabajo pretende indagar qué papel cumple el movimiento campesino paraguayo como principal actor de resistencia al avance de la soja transgénica y al modelo neoliberal. Realizaremos un análisis sobre las características políticas y económicas del ámbito rural paraguayo, donde por un lado encontramos un sector social que se integra al mercado a través de la producción agroindustrial, bajo un régimen político comandado por el Partido Colorado que los favorece, mientras, por otro lado, los campesinos, grupo social mayoritario, sufren marginación y represión estatal, carentes de herramientas institucionales que les permitan acceder a la tierra y a la ciudadanía. Intentaremos ver cómo los grupos campesinos organizados son el subsuelo político del Paraguay, un territorio que, más que una sociedad integrada, es un país que contiene dos modelos societales en sobreposición desarticulada.

PARAGUAY Y LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

Desde la apertura democrática de 1989, cuando integrantes del propio régimen desplazaron con un golpe de estado a Alfredo Stroessner del poder dictatorial ejercido por 35 años, Paraguay vive bajo un régimen de elecciones periódicas, progresivamente transparentes. Ese año, el Ejército y la Asociación Nacional Republicana -también llamada Partido Colorado, al frente del gobierno desde 1947- iniciaron una controlada transición democrática basada en el mantenimiento de la pequeña elite económica, la renuncia a enjuiciar los crímenes cometidos durante la dictadura, la neutralización de las organizaciones de izquierda y el intento de implantar un modelo capitalista democrático convencional, en el marco de la apertura y liberalización de la pequeña economía nacional, todo bajo el continuismo del propio Partido Colorado (Polo, 2002).

Hasta la actualidad, el Partido Colorado predomina en el mapa político, en la gestión de gobierno, en el control del aparato estatal y en el manejo de clientelas, aun admitiendo una cierta renovación en su interior y apertura a aceptar mayores grados de pluralismo (Mirza, 2006: 191). De tal modo, el sistema de partidos paraguayo puede ser calificado como hegemónico en transición, lo que significa que hay un partido que está permanentemente vinculado al estado y los demás partidos son de segunda clase o periféricos, sin posibilidades reales de llegar al gobierno (Mirza, 2006: 142). De una población de aproximadamente 5,5 millones de habitantes, alrededor de 1.550.000 son afiliados al partido oficial, al tiempo que hasta las últimas elecciones municipales, ocurridas el 19 de noviembre de 2006, el Partido Colorado obtuvo un amplio triunfo, resultando ganador en el 70% de los 230 distritos en que se divide el país (*ABC*, 2 de mayo de 2007).

El avance democrático se restringió a un cambio en las reglas de juego, en un contexto mundial donde el avance neoliberal permite desconocer el grado de democratización política y social alcanzado en la historia de las sociedades modernas (Tapia, 2007b). No se han aplicado políticas de contenido económico, social y cultural que reviertan las desigualdades heredadas de la dictadura, los índices de analfabetismo no decrecieron, miles de niños padecen desnutrición crónica y la concentración del ingreso y la pobreza aumentaron. Actualmente, más del 60% de la población es pobre y de ellos el 32% vive en la extrema pobreza (Pelaez, 2007).

En lo que refiere al problema histórico de la distribución de la tierra, el proceso de latifundización se profundizó. Por un lado, en 1992 fue reformada la Constitución Nacional, introduciendo en ella un texto propuesto por la Asociación Rural del Paraguay (ARP) -portavoz de los terratenientes- que prácticamente imposibilita las expropiaciones a través de las vías formales. Por otro lado, en la campaña 1999/2000 fue introducida al agro nacional la soja transgénica, que es cultivada en grandes extensiones de tierra y de modo mecanizado y que, sumado al uso intensivo de agroquímicos, imposibilita el desenvolvimiento de los campesinos en sus territorios. Estas circunstancias potenciaron los procesos de resistencia y la organización de diversos grupos campesinos, ante lo cual la respuesta estatal fue la defensa del latifundio

mediante una creciente represión oficial o de matones contratados por los hacendados, ampliamente justificada por los medios de comunicación, que presentan a los titulares de las tierras como los pilares básicos de la economía y señalan a las históricas poblaciones locales como delincuentes (Fogel, 2004: 103).

LA AGROINDUSTRIA AVANZA SOBRE EL TERRITORIO NACIONAL

Paraguay es un país eminentemente agropecuario, tanto en lo económico como en lo social. El sector agropecuario genera el 27% del Producto Bruto Interno (PIB), ocupa el 36% de la población económicamente activa y aporta el 90% de las divisas (Mora, 2006: 345).

Durante los años que Alfredo Stroessner encabezó el gobierno (1954-1989), el proceso de latifundización puesto en marcha desde de la Guerra de la Triple Alianza se intensificó y fueron sentadas las bases para que hoy la concentración de la tierra sea la más alta de la región. El dictador, por una parte, entregó como prebendas cuantiosas extensiones de tierra fiscal a civiles y militares de su entorno y a partir de la década de 1970 facilitó la expansión de medianos y grandes productores, a costa de la marginación del campesinado local (Fogel, 2006: 96). Estas tierras son denominadas en el país como tierras mal habidas y se estima que ascienden a 13 millones de hectáreas.

A pesar de esta política de estado, hasta comienzos del año 2000 poco más de la mitad de la población vivía en áreas rurales, en pequeñas explotaciones campesinas y dependiendo de la producción primaria. Según datos oficiales de 1996, 80,6% de las fincas eran unidades de producción menores a 20 has y ocupaban el 6,2% de la superficie; en tanto, 1,5% de las fincas eran mayores a 500 has y ocupaban el 79% de las tierras (FAO/IBR, en Palau, 2003: 5 y 6).

Pero al histórico problema de la desigual distribución de la tierra, con la introducción del cultivo de soja transgénica a partir de la campaña agrícola 1999/2000 se ha sumado el desarrollo de la agricultura empresarial mecanizada, que significa la penetración total del modelo agroindustrial a la agricultura paraguaya y el consecuente intento de una agricultura sin agricultores.

Para que los niveles de producción sean rentables, la soja debe ser cultivada en grandes extensiones. Sin disponibilidad al presente de tierras fiscales, la instalación de la siembra de soja conlleva una concentración de tierras cada vez mayor: los tradicionales campos ganaderos progresivamente van siendo reconvertidos, se avanza sobre lo que resta del monte nativo y se fuerza a las familias campesinas a desplazarse de sitio¹.

Está en marcha un proceso de acumulación crecientemente desarticulado. Por una parte, se extiende la agricultura empresarial, de producciones intensivas en capital, que obtiene cosechas récord y aumenta sus exportaciones y, por otra parte, se expande un proceso de descomposición y empobrecimiento de las economías campesinas. El actual modelo agropecuario cada vez más expulsa

de sus lugares de origen a miles de campesinos y eleva el número de sin tierras, que hoy llegan a 400 mil. En los últimos cuatro años, alrededor de 100 mil personas han emigrado anualmente a las periferias marginales de las ciudades, una parte de ellas abandonando el país (Palau, en Ortiz, 2007). Con todo, este escenario también potencia la organización de miles de campesinos, que aumentan la disputa por la tierra y luchan contra el sistema que causa su exclusión.

CAMPESINOS Y AGROINDUSTRIA: DOS MODELOS DE SOCIEDAD SE SOBREPONEN

Campesinos son aquellos que trabajan la tierra que poseen, no necesariamente en propiedad, con la sola ayuda del trabajo familiar y con el objetivo de atender sus necesidades de consumo alimentario. Si hay excedentes los venden o también pueden producir cultivos de renta para atender su carencia de dinero, pero sus vínculos con el mercado son débiles. La tierra es su medio de vida, el lugar donde producen y reproducen el grupo familiar y, en determinados contextos, el origen de su linaje. Sin tierra, los campesinos dejan de ser tales (Piñeiro, 2004:146). El patrón tradicional del sistema productivo campesino se basa en la diversificación productiva, lo que significa que la prosperidad no se asocia con la producción a gran escala de un cultivo de renta, sino que apunta a que la variedad agropecuaria permita desarrollar un modelo de seguridad alimentaria y de estabilidad ante las contingencias climáticas y del mercado agrícola (Palau, 2003:12).

Por otra parte, la concepción campesina del territorio es mucho más amplia que la concepción productivista hoy motorizada por la agroindustria, que concibe a la naturaleza como recursos explotables y que tiene como primacía la acumulación. Para los campesinos el territorio incluye el suelo y el subsuelo, la tierra y las riquezas naturales que la rodean o que están en sus entrañas; es a través del territorio que satisfacen sus necesidades básicas y reproducen su estilo de vida e identidad, asociado al derecho de todos de cubrir su subsistencia (Giarraca, 2006: 60 y Fogel, 2004: 105). Para los campesinos, por lo tanto, la tierra no puede reducirse a un mero instrumento de mercado o de especulación inmobiliaria. Es lugar de vida, de producción, de relaciones, de identidad y de soberanía. Por eso proponen recuperarla como un bien social.

Existen, entonces, diferentes concepciones del territorio porque en el país existen diferentes tipos de sociedad. En la superficie de la sociedad se expresa sólo una de esas concepciones, la productivista, que objetiva a la naturaleza y la valora sólo en función de su utilidad; ésta se corresponde a una base social, la de los dueños de la tierra y del capital y es articulada y sintetizada por el estado. Pero en la superficie aparecen también algunas manchas que provienen de otras formas sociales, en este caso las campesinas, formas diversas y muchas veces desarticuladas, ocultas y no reconocidas desde la superficie y que normalmente circulan en lo que podemos definir como el subsuelo social y político (Tapia, 2007a).

Cuando nos referimos a subsuelo político estamos hablando del “conjunto de prácticas y discursos políticos que no son reconocidos social y estatalmente, pero que de todos modos emergen como formas de asociación, interacción y opinión de la dimensión política y de gobierno de las sociedades. El subsuelo político es el margen más o menos amplio de los no reconocimientos o desconocimientos que existen en un país o sociedad, así como la ciudadanía es el margen de los reconocimientos políticos, públicos y estatales” (Tapia, 2007a: 12). En Paraguay, al subsuelo político lo constituyen fundamentalmente las múltiples organizaciones campesinas.

De tal manera, se sobreponen en el país varios modelos de sociedad. Por un lado, nos encontramos con las divisiones propias de una sociedad moderna, pero, por otro, coexisten grandes sectores de la población que articulan otro tipo de relaciones sociales, formas de producción, comunidad e incluso de autoridades locales que se superponen de modo inorgánico a las del estado nación. En este sentido, podemos afirmar que Paraguay puede ser entendido como un país multisocietal (Tapia, 2007a).

LOS CAMPESINOS ORGANIZADOS: EL SUBSUELO POLÍTICO EN EMERGENCIA

Dos son las principales referencias campesina²: la Federación Nacional Campesina (FNC) y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC). La FNC tiene capítulos regionales y responde al Partido Político Paraguay Pyahurã (PPPR), de inspiración marxista leninista. La MCNOC –que articula a los partidos políticos de izquierda Convergencia Popular Socialista (CPS) y Partido de los Trabajadores (PT) y a más de 30 organizaciones campesinas con relativa autonomía– se define como una unidad de acción, tiene un carácter más pluralista y una estructura bastante laxa (Palau, 2005a: 37). Más allá de las diferencias de estructura organizativa y divergencias tácticas y estratégicas, ambos movimientos representan a campesinos pobres con pluriactividad, son contrarios a las políticas neoliberales y coinciden en la necesidad de una reforma agraria integral, lo que implica no sólo el desaliento del latifundio y la recuperación de las tierras mal habidas, sino la búsqueda de un cambio en el modelo agroindustrial y el reclamo al estado de otro tipo de intervención política y económica, mediante el impulso de programas de servicios sociales, entrega de herramientas, construcción de caminos y mejoramiento de infraestructura, entre otros puntos. Estas demandas, sin embargo, son ignoradas por las autoridades.

Hasta pocos años atrás, el estado desempeñaba un papel medular para los sectores dominantes, pero dejaba de lado el intento de integrar la economía agraria nacional al mercado internacional; sin embargo, con la expansión de la soja y las inversiones de capital extranjero, el estado ha ido reconfigurando su rol a través de la aprobación de nuevas normas jurídicas, adhiriendo a las creadas en los espacios transnacionales, entregando los recursos naturales y judicializando las resistencias y los conflictos sociales (Giarraca, 2006). De este modo, mientras los históricos ocupantes de la tierra deben luchar por no ser desplazados, los sojeros amplían cada vez más sus negocios mediante un

nuevo marco institucional. En consecuencia, las leyes y el sistema judicial no implican igualdad de derechos entre los diferentes grupos sociales. No es de extrañar, entonces, que los campesinos expresen que consideran a la justicia simplemente como “un instrumento de opresión de los pobres” (*ABC Color*, 27 de marzo de 2007).

Ante la falta de canales institucionales, la modalidad de lucha de los movimientos campesinos es la negociación luego de masivas movilizaciones u ocupaciones de tierras, justificadas esencialmente en que las necesidades básicas de todos deben ser satisfechas. Bloquean carreteras, invaden haciendas, queman sojales y obstruyen el ingreso de maquinarias y personal para las fumigaciones. Esto ha generado que los gobiernos vean en la firmeza campesina una traba para la gobernabilidad y hayan promovido la criminalización de la protesta social y la militarización para defender el derecho a la propiedad³. Actualmente, alrededor de 3 mil dirigentes sociales están condenados a prisión, aunque en libertad condicional (Stefanoni, 2007)

Por ende, a pesar de que a comienzos de la transición democrática los campesinos tenían expectativas de que con el nuevo régimen podrían conseguir soluciones a los viejos conflictos agrarios, sus anhelos se ven cotidianamente frustrados. La democracia funciona en Paraguay, pero la ciudadanía, entendida como “la integración de todos los sectores de la sociedad al ámbito de reconocimiento político a través de los derechos” (Tapia, 2007a: 3), es patrimonio de unos pocos. No existen mecanismos institucionales por medio de los cuales las poblaciones campesinas puedan frenar la latifundización de la tierra y la expansión acelerada del modelo agroindustrial.

Esta situación conlleva que los grupos de campesinos vayan desarrollando una nueva identidad, fundada, por un lado, en sus tradiciones culturales y, por otro, como respuesta a la actual explotación económica y dominación política (Morínigo, 2003: 27). Con el ingreso del cultivo de soja transgénica, la lucha ya no es sólo por la distribución de la tierra, sino en contra del consecuente proceso de desarraigo que acarrea el modelo agroindustrial y por el derecho a producir con sus propias y diversas semillas, desarrollando técnicas agrícolas de acuerdo con la economía campesina y el equilibrio del medio ambiente. Surgen nuevos dirigentes, a la vez que se dinamiza el conocimiento crítico y se desarrolla un fuerte sentido de la identidad, estimulado por la existencia de un enemigo visible, el llamado colonizador, quien no se integra a la comunidad e impone por la fuerza sus intereses con ayuda de las autoridades que, además de poner a su disposición los recursos represivos, benefician a los hacendados con préstamos estatales y la renegociación de sus deudas (Palau y Krestchmer, 2004: 109-111).

LA LUCHA CAMPESINA SE EXTIENDE AL MODELO NEOLIBERAL

La ofensiva agroindustrial va devastando la sociedad campesina e implica para el país una triple pérdida de soberanía. Por una parte, no existe la soberanía económica: el proceso hacia el monocultivo de soja transgénica genera cada vez mayor dependencia de las exportaciones de este producto (cuyas semillas

son proveídas por una sola empresa, la corporación norteamericana Monsanto, que exige el pago de regalías) y su reverso es la necesidad cada vez mayor de todo tipo de importaciones. Por otro lado, hay pérdida de la soberanía territorial, ya que inmensas extensiones de tierra son adquiridas por propietarios extranjeros, privados o corporativo⁴. Por último, disminuye paulatinamente la soberanía cultural y alimentaria⁵, a raíz de que la soja desplaza la diversificación y con ello los cultivos de subsistencia desarrollados hasta ahora exitosamente en el país (Zibechi, 2005 y Palau, 2007).

Desde 2004 las organizaciones campesinas van orientando sus críticas al modelo agroexportador, planteando la necesidad de discutir un modelo nacional verdaderamente sostenible⁶. Asocian la vida digna a la recuperación de la soberanía nacional, en un contexto en el cual la dinámica integradora del MERCOSUR colabora para que los campesinos vean pauperizadas sus condiciones de vida, mientras los grandes productores, fundamentalmente brasileños, se escudan en los argumentos de la integración regional para expandirse sobre el territorio (Fogel, 2004: 106).

Los campesinos denuncian que el modelo de desarrollo impulsado en el MERCOSUR agrava la degradación ambiental, profundiza la pobreza y la exclusión social al interior de los países y amplía las desigualdades entre los mismos. Proponen, en cambio, otro tipo de integración regional, basada en la cooperación solidaria, la equidad, la inclusión, la diversidad, la soberanía local, la democracia, la justicia social y la idoneidad ecológica y ambiental (*Declaración de Asunción, 2007*).

Cada vez más, el campesinado organizado se constituye en el principal actor de resistencia al modelo agroindustrial y neoliberal. El eje aglutinante suele girar en torno al resurgimiento del sentimiento nacionalista, inspirado en la oposición a la apertura irrestricta al libre mercado y a las recetas económicas impuestas por el FMI y el Banco Mundial (Galeano, 2003: 35).

Desde 1999 las organizaciones campesinas reclaman al estado programas de desarrollo nacional y no sólo la reactivación económica del sector rural. Entre otros puntos, demandan educación y salud pública, gratuita y de calidad; seguro para los desempleados de todo el país; seguro social con cobertura universal; la no privatización de las empresas públicas y los recursos naturales; la defensa de la diversidad biológica; una banca pública para el desarrollo; tarifa social para el consumo familiar; el freno a la flexibilización laboral; el fin de la criminalización de las luchas sociales. En los últimos años, junto con organizaciones sindicales, estudiantiles y diversos grupos ciudadanos, los movimientos campesinos han jugado un rol importante en la paralización del proceso de privatizaciones y de reforma de la banca pública, con cortes de rutas y movilizaciones hacia Asunción⁷; también en la lucha contra del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) o en la campaña de oposición a la inmunidad brindada por el Legislativo a las tropas norteamericanas para la realización de ejercicios militares en territorio paraguayo durante parte de 2005 y 2006.

Asimismo, en 2006 los grupos campesinos fueron uno de los principales sectores que a lo largo del mes de marzo se movilizó con marchas y cortes de ruta para impedir que el presidente Nicanor Duarte Frutos consiguiera impulsar su reelección y ocupara, a la par del Ejecutivo nacional, la presidencia del Partido Colorado, infringiendo la Constitución Nacional con la anuencia de la Corte Suprema de Justicia. El 29 de marzo integraron la mayor manifestación multisectorial desde comienzos de la transición democrática cuando, bajo el lema “Paraguay está harto”, 40 mil personas participaron de un acto en Asunción liderado por el entonces monseñor Fernando Lugo en reclamo de la vigencia del estado de derecho, el respeto a las instituciones, una justicia independiente y una democracia donde se respeten las leyes (Aranda y Mernes, 2006).

LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS FRENTE AL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO

Las organizaciones campesinas rechazan la naturalización del neoliberalismo, intentando redefinir el papel del estado a contracorriente de los dogmas del “estado mínimo” y su modalidad militarizada; reclaman un estado que regule el mercado y promueva el desarrollo nacional, un estado que participe en la formulación de políticas y no sólo en su ejecución y que además recupere el diálogo como mecanismo democrático (Fogel, 2004:107). En este sentido, el retorno a la democracia implica el involucramiento de todos los sectores sociales en la discusión política activa sobre el rumbo político y económico que debiera tomar el país.

Las formas de participación varían en el caso de cada organización, pero como rasgo común podemos señalar que el activismo va asociado a relaciones de solidaridad, reciprocidad y cooperación. Comparten como características la preocupación por los problemas medioambientales, la importancia dada al arraigo territorial, la revalorización de la cultura y de la identidad campesina, el nuevo papel promovido por y hacia las mujeres y el intento de formación política de sus integrantes. Esas prácticas aparecen como inseparables tanto de la construcción de la resistencia como de la democracia. Esta democracia, por su modalidad, cuestiona la concepción de la política restringida a la esfera institucionalizada del estado y objeta por limitado el juego formal de las elecciones periódicas. La ciudadanía en esta visión que emerge de los sectores campesinos movilizados remite a derechos colectivos que no tienen ninguna afinidad con el pensamiento neoliberal (Fogel, 2004:105-108; Palau, 12 de agosto de 2005).

Así, hasta pocos meses atrás las organizaciones campesinas expresaban escepticismo frente al sistema de representación basado en el voto periódico⁸. Pero con el liderazgo nacional ganado por Fernando Lugo a lo largo de 2006, quien renunció a su condición de obispo en diciembre pasado para lanzarse a la carrera presidencial, ciertos grupos campesinos comienzan a incursionar en la política electoral, sumándose a alguna de las coaliciones que apoyan su candidatura para las próximas elecciones de marzo de 2008.

El movimiento político Tekojoja (unión e igualdad de condiciones, en idioma guaraní) ha sido conformado con el fin de motorizar la campaña presidencial del ex monseñor e incluye como parte del grupo a cientos de campesinos⁹. Sus principales reivindicaciones son la revolución agraria, la recuperación de la soberanía energética, el rechazo de las tropas extranjeras y la no criminalización de las luchas sociales (Moreno, 2006). También acompaña la candidatura de Lugo el Bloque Social y Popular (BSP), compuesto por partidos de izquierda, movimientos sociales, centrales sindicales y movimientos campesinos¹⁰.

Por primera vez muchos movimientos campesinos se suman a un proyecto electoral nacional encabezado por quien sostiene que gobernará para los más pobres, proclama la necesidad de una reforma agraria y afirma tener simpatías por el Socialismo del Siglo XXI (Gonaldi, 2006). Fernando Lugo es hoy el referente más claro de la oposición, única figura capaz de romper el continuismo de más de seis décadas del Partido Colorado.

Sin embargo, Lugo no es el emergente de un proceso social en el que sus actores se planteen como meta la conformación de un sistema alternativo al capitalista, ni siquiera al modelo neoliberal o al agroindustrial. Al liderazgo de su figura no sólo lo acompañan los movimientos campesinos, sociales y sindicales de Tekojoja y el BSP, también lo hacen todos los partidos políticos tradicionales, agrupados desde agosto de 2006 en la coalición opositora Concertación Nacional. Son parte de la Concertación el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) -segunda fuerza política del Paraguay-, el Partido Patria Querida (PPQ), el Partido Encuentro Nacional (PEN), el Partido País Solidario (PPS), el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Independiente, el Partido Revolucionario Febrerista (PRF), disidentes del propio Partido Colorado y el Partido de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), movimiento proveniente de las filas del coloradismo, liderado por el ex general golpista Lino Oviedo. Los partidos enumerados, la mayoría de los cuales tienen integrantes ocupando bancas parlamentarias, han fomentado y fomentan con sus manejos el mismo modelo que hoy el ex obispo y muchos de sus seguidores proclaman querer enfrentar. No obstante, Lugo prefiere sumar fuerzas para acabar con el predominio del Partido Colorado y es renuente a posicionarse en el espectro ideológico. Afirma que le interesan las soluciones, no las etiquetas, dado que “el hambre y el desempleo no tienen ideología” (Lugo, en Rohter, 2007).

En este sentido, el Partido Colorado puede ser el actor más fuerte en las disputas partidarias, pero no por eso es el único partícipe de la compleja relación social que se expresa en los aparatos de estado. Actualmente con la transformación de la agricultura rural en industrial y de la producción de alimentos en toneladas de soja que son mercancías altamente valoradas en el mercado internacional, las políticas estatales están explícitamente concebidas para desalojar el campo de campesinos y proceder a su ocupación empresarial. El aparato estatal, tanto donde está al frente el Partido Colorado como en las gobernaciones donde lo está cualquier otro partido, organiza y garantiza la relación social y conflictiva que implica el capitalismo (O'Donnell, 1982) y legitima el marco institucional para que éste se expanda bajo su actual modalidad neoliberal, controlando las luchas sociales que intentan enfrentarlo.

En consecuencia, si advertimos que las formas en que se materializa la relación de poder en el estado están atravesadas por las luchas sociales (Thwaites Rey, 2004), podemos afirmar que el estado difícilmente cambiará sin un proceso que suponga el paso del subsuelo político hacia la superficie. Hasta el momento, incluso con la figura de Fernando Lugo a la cabeza, observamos una disputa institucional que, de fondo, se da entre quienes legitiman el modelo que indefectiblemente conlleva la paulatina desaparición del campesinado.

CONCLUSIONES

La ciudadanía propia de las sociedades modernas supone reformas institucionales, reformas del estado y, en sentido gramsciano, una reforma moral e intelectual de la sociedad en su conjunto. En el proceso que esto implica, los actores sociales cuyas prácticas quedaban en condiciones de marginación y desarticulación, configurando el subsuelo político, van conquistando a través de múltiples acciones el reconocimiento político en las complejas instituciones de la sociedad civil y del estado. Por esta razón, en la medida que hay ciudadanización, se produce un cambio en los valores y principios de legitimación de la política y del poder estatal, se produce una ampliación del estado (Tapia, 2006 y 2007).

Al presente, este proceso no se ha producido en Paraguay. En el país, la mayor parte de la población no sólo carece derechos políticos, sociales y económicos, viviendo inmersa en la pobreza y bajo un régimen político que, a pesar de sus cambios, está manejado desde hace 60 años por un mismo partido político que ha sabido adecuarse a las cambiantes necesidades del capital internacional, sino que, al mismo tiempo y en consecuencia, coexisten grandes sectores de la población que articulan otro tipo de relaciones sociales, formas de producción, comunidad e incluso de autoridades locales que se superponen de modo inorgánico a las del estado nación. Este subsuelo político lo constituyen fundamentalmente los grupos campesinos movilizados, que plantean una concepción diferente de modelo de producción, de democracia, de relación con la naturaleza, de integración regional. De las movilizaciones e iniciativas campesinas, por lo tanto, es inseparable una redefinición del propio tipo de estado.

Hasta ahora, como las estructuras e instituciones del estado imposibilitan a los campesinos hacer oír sus voces y legitimar sus prácticas, el subsuelo político no puede emerger de otro modo que como crisis. Pero estas crisis sólo generan inestabilidad política, dado que, en momentos álgidos de conflicto social, únicamente alcanzan a provocar crisis de gobierno. Durante estos períodos pueden sobrevenir sucesivas declaraciones oficiales, erráticos cambios de políticas gubernamentales y prevalecer una generalizada sensación de que no se logra estabilizar ningún poder público. Pero quienes las motorizan no consiguen plantear divergentes criterios de representación y canales de acceso a esos roles, tampoco introducir una crisis de acumulación, entendida como acciones de las clases subordinadas que sean percibidas por las clases dominantes como obstáculos sistemáticos al funcionamiento de la economía. Menos todavía podemos pensar en una crisis de dominación o en

una crisis de hegemonía (O`Donnell, 1982: 49-57). De aquí, por lo tanto, que algunos grupos depositen sus esperanzas de cambio en la figura carismática del ex obispo Fernando Lugo.

Dada la actual coyuntura política, es posible que el ex monseñor consiga desplazar del Ejecutivo al Partido Colorado. No obstante, la gama ideológica de la coalición opositora que lo respalda es tan amplia que, por un lado, puede facilitar su triunfo en las urnas, pero a la vez hacer que un hipotético gobierno de la Concertación quede preso de los pactos políticos. Por ende, es probable que el fin de la supremacía colorada sea un paso, pero no el suficiente como para que se produzca un proceso de integración paulatina de los distintos sectores sociales al estado, abriendo el camino a un proceso de ciudadanización. Para esto es necesario que quienes pugnan por un modelo diferente de sociedad no objetiven al estado, entendiéndolo sólo como un conjunto de instituciones.

Así como los grupos campesinos intentan romper la división campo ciudad y asumen que el cultivo de soja transgénica es parte de la expansión de un modelo depredatorio que va más allá del crecimiento de la agricultura empresarial, del mismo modo la búsqueda de soluciones para el problema agrario deberá ser entendida por todos los actores políticos y sociales que se plantean por objetivo un modelo de país alternativo al neoliberal, no sólo como una cuestión campesina o de simple voluntad política, sino como un problema de orden político, económico y social al que habrá que abordar de raíz para que no continúe extendiéndose como un subsuelo político que periódicamente emerge como crisis. De llevar a cabo una auténtica ampliación del estado y no apresurar el camino por alcanzar sus instituciones depende que el Paraguay deje de ser un país multisocietal.

BIBLIOGRAFÍA

Campesinos marchan con sus reclamos de siempre al Estado, *ABC Color Digital*, 27 de marzo de 2007. [On line]. Disponible:

<http://www.abc.com.py/articulos.php?fec=2007-03-27&pid>

Un balance revela el formidable poderío económico que tiene el Partido Colorado, *ABC Color Digital*, 2 de mayo de 2007. [On line]. Disponible:

<http://www.abc.com.py/articulos.php?pid=327073>

Aranda, D. y Mernes, M. (30 de marzo de 2006) La marcha Resistencia Ciudadana exigió la renuncia de ministros que atentan contra la Constitución. [On line]. Disponible: <http://www.cird.org.py/gjai>

Boff, L. (2 de agosto de 2006) Ecología y capitalismo se niegan frontalmente.

En *Rebelión* [On line]. Disponible: <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=13415>

Declaración de Asunción, Cumbre de los pueblos del sur (29 de junio de 2007)

En *Minga Informativa de Movimientos Sociales*. [On line]. Disponible:

<http://movimientos.org>

Fassi, Mariana C. (2002) Cronología del Conflicto. Paraguay. *OSAL, Observatorio Social de América Latina*, año III, N° 7, junio. Buenos Aires: CLACSO.

Fassi, Mariana C. (2006) Paraguay, un territorio en disputa. *Periferias, Revista de Ciencias Sociales*, Año 10, N°13, primer semestre, 47-68.

Fogel, Ramón (2004) Movimientos campesinos y su orientación democrática. *NovaPolis Revista de Estudios Políticos Contemporáneos*, N°7, Asunción.

Fogel, Ramón (2006) Movimientos campesinos y su orientación democrática en el Paraguay. En de Grammont, Hubert C. (comp.) *La construcción de la democracia en el campo latinoamericano*. Buenos Aires: CLACSO.

Galeano, Luis (2003) Movimiento Campesino hoy. Conquistas y derrotas en un contexto contradictorio de crisis social y política. *NovaPolis Revista de Estudios Políticos Contemporáneos*, N°2, Asunción.

Giarraca, Norma (2006) Territorios en disputa: los bienes naturales en el centro de la escena. *Realidad Económica*, N°217, Buenos Aires.

Gonaldi, G. (20 de diciembre de 2006) Un obispo jaquea el intento reeleccionista de Duarte Frutos. En *ALAI América Latina*. [On line]. Disponible: <http://alainet.org/active/15104<=es>

Decreto N°167/3 (27 de agosto de 2003) En *leyes.com.py*. [On line]. Disponible: http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/2003/decretos/decreto_167_03.htm

Mirza, Christian A. (2006) *Movimientos Sociales y Sistemas Políticos en América Latina. La Construcción de Nuevas Democracias*. Buenos Aires: CLACSO.

Mora, Carlos (2006) Participación y organizaciones campesinas en Paraguay, en de Grammont, Hubert C. (comp.) *La construcción de la democracia en el campo latinoamericano*. Buenos Aires: CLACSO.

Moreno, C. (enero de 2006) Paraguay: la izquierda comienza a levantarse. En *Boletín Entorno*, año IV, N°106. [On line]. Disponible: <http://listas.cult.cu/mailman/listinfo/entorno>

Morínigo, José N. (2003) De la protesta social al movimiento campesino". *NovaPolis. Revista de Estudios Políticos Contemporáneos*, N°2, Asunción.

O'Donnell, Guillermo (1982) *El Estado burocrático autoritario*. Buenos Aires: De Belgrano.

Ortiz, A. (1 de marzo de 2007) El agotamiento del Estado Oligárquico Colorado. En *ALAI América Latina*. [On line]. Disponible: <http://alainet.org/active/16115<=es>

Palau, Marielle y Krestchmer, Regina (2004) La 'guerra de la soja' y el avance del neoliberalismo. *Revista OSAL*, N°13. Buenos Aires: CLACSO.

Palau, Tomás (2003) Políticas Agrarias en el Paraguay. Instrumentos de la discriminación. *NovaPolis Revista de Estudios Políticos Contemporáneos*, N°2, Asunción.

Palau, Tomás (2005) El movimiento campesino en el Paraguay: conflictos, planteamientos y desafíos. *Revista OSAL*, N°16. Buenos Aires: CLACSO.

Palau, T. (12 de agosto de 2005) Conflictos y desafíos del Movimiento Campesino. [On line]. Disponible: www.nuestraamerica.info/leer.hlv/4367

Palau, T. (5 de marzo de 2007) Avance de la soja GM en el Paraguay. En *EcoPortal.net*. [On line]. Disponible: www.ecoportal.net/content/view/full/57025

Piñeiro, Diego (2004) *En busca de la identidad. La acción colectiva en los conflictos agrarios de América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.

Polo, H. (2 de marzo de 2002) Paraguay: la sombra de Stroessner. En *EcoPortal.net*. [On line]. Disponible: <http://www.ecoportal.net>

Rohter, L. (11 de mayo de 2007) Fernando Lugo Méndez: monseñor candidato. En *La Nación Suplemento Enfoques*. [On line]. Disponible: http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/suplementos/enfoques/nota.asp?nota_id=888213

Stefanoni, Pablo (2007) Fin de época en Paraguay. *Le Monde Diplomatique*, año 9, N°97, julio, Buenos Aires.

Tapia, Luis (2006) *La invención del núcleo común. Ciudadanía y gobierno multisocietal*. Bolivia: Muela del Diablo editores.

Tapia, Luis 2007a *Subsuelo Político*, mimeo

Tapia, Luis 2007b *El movimiento de la parte maldita*, mimeo.

Thwaites Rey, Mabel (2004) *La autonomía como búsqueda, el Estado como contradicción*. Buenos Aires: Prometeo.

Vía Campesina. Qué es la soberanía Alimentaria. (1996) En *EcoPortal.net*. [On line]. Disponible: <http://www.ecoport.net/content/view/full/25873>

Zibechi, R. (9 de mayo de 2005) La guerra de la soja en Paraguay. El napalm de Monsanto. En *Biodiversidad en América Latina*. [On line]. Disponible: www.biodiversidadla.org/content/view/full/15988

¹ La contaminación ambiental es uno de los principales problemas que afrontan las familias campesinas. A las presiones que sufren para entregar sus tierras a los sojeros y emigrar hacia otros lugares (dado que una vez transformados los campos en sojales, casi no se necesita mano de obra) se suma que la soja transgénica necesita masivas fumigaciones con potentes agroquímicos para que el resultado de su siembra sea exitoso. Los agrotóxicos -como los llaman las comunidades locales- llegan a impedir que los campesinos produzcan para el autoconsumo, contaminan arroyos y pozos de agua, matan animales e intoxican comunidades enteras, cuyos integrantes padecen enfermedades crónicas y algunos hasta mueren por envenenamiento. El caso del niño Silvino Talavera, muerto tras sucesivas fumigaciones cercanas a su hogar en enero de 2003 en Itapúa, es el ejemplo más conocido a nivel nacional, puesto que ha adquirido carácter público a raíz de la pelea judicial llevada a cabo desde hace años por su familia y la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI) a la que pertenece su madre, Petrona Villasvoa (Fassi, 2006).

² Hasta mediados de 1970 las Ligas Agrarias fueron la experiencia de lucha campesina más importante. Se extendieron por todo el territorio nacional desde 1960, pero el régimen represivo de Alfredo Stroessner las consideró un atentado a la seguridad nacional y en 1976 fueron duramente sofocadas: más de mil campesinos fueron encarcelados, centenares perseguidos y torturados y sus principales dirigentes ejecutados. A diferencia de otros países del cono sur de América Latina, la mayoría de las víctimas de la dictadura perteneció a los grupos campesinos.

³ Las autoridades combaten las dificultades del campo con represión, desalojos violentos, destrucción de cultivos, incendios de chozas, apresamientos masivos, torturas y asesinatos. Actúan para esto por medio de las fuerzas de "seguridad" (policías, militares y fiscales) y mediante las Comisiones de Seguridad y Defensa Ciudadana (CSDC), grupos de civiles armados creados por el Ministerio del Interior. Desde el secuestro y asesinato en 2004 de Cecilia Cubas, hija del ex Presidente Raúl Cubas Grau (1998-1999), el gobierno fomenta a través de los medios de comunicación una campaña de ilazón directa entre el Partido Patria Libre (PPL)- las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)- grupos guerrilleros en el interior del país- narcotraficantes- secuestradores- delincuentes y campesinos. En este marco, desde marzo de 2005 el gobierno de Nicanor Duarte Frutos establece con el gobierno de Colombia mecanismos de cooperación recíproca para el combate coordinado contra el terrorismo: guerrillas, secuestros extorsivos, narcotráfico (Fassi, 2006). El 3 de mayo de 2007, la Cámara de Diputados da media sanción al proyecto de reforma del Código Penal, introduciendo el delito de terrorismo, con penas de hasta 30 años de cárcel, que contiene artículos que por su imprecisión podrán ser usados para la persecución política e ideológica.

⁴ La mayoría de los sojeros son brasileños -sobre todo en la región oriental del país- pero además encontramos colonias menonitas, terratenientes alemanes y de otras nacionalidades.

⁵ El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al debate público en 1996, en ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación. Desde entonces, ha

sido discutido incluso en las Naciones Unidas. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros; es el derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién lo produce (Vía Campesina, 1996).

⁶ El concepto de sostenibilidad proviene de la biología y de la ecología; significa la capacidad de un ecosistema de incluir a todos, de mantener un equilibrio dinámico que permita la subsistencia de la mayor biodiversidad posible. Sostenibilidad y crecimiento capitalista se excluyen mutuamente (Boff, 2006).

⁷ Entre mediados de mayo y principios de junio de 2002, a través de la conformación y movilización en todo el país del Congreso Democrático del Pueblo -integrado por el Frente Nacional de Lucha por la Defensa de la Vida y la Soberanía (liderado por la MCNOC) y por el Frente de Defensa de los Bienes Públicos y del Patrimonio Nacional (liderado por la FNC) que reunían a la casi totalidad de las organizaciones sociales, campesinas o no, más algunos grupos políticos anti privatistas pertenecientes al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)- consiguieron derogar la ley 1615 de privatizaciones y de esta manera frenar la concesión de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO) y de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) (Fassi, 2002).

⁸ La FNC considera que el sistema electoral es una falacia y propone la abstención como forma de protesta.

⁹ Forman parte de Tekojoja activistas que se suman directamente al movimiento y campesinos del Movimiento Agrario y Popular (MAP), de origen religioso evangélico, que opera por fuera de la FNC y la MCNOC.

¹⁰ Integran el BSP la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares (CNOCIP) y la Organización Nacional Campesina (ONAC), ambos grupos de alcance nacional que actúan por fuera de la FNC y la MCNOC. Además, el Partido del Movimiento al Socialismo, el Partido de los Trabajadores, el Partido Frente Amplio, el Partido Humanista, el Partido Socialista, el Movimiento Comunero del Paraguay, la Central Nacional de Trabajadores (CNT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central Unitaria de Trabajadores-Auténtica (CUT-A) y el Movimiento Revolucionario Estudiantil.